

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

LOS INTELLECTUALES PERCIBEN LO POLÍTICO EN COSTA RICA*

Alexander Jiménez, Jesús Oyamburu y Miguel Ángel González, comps. *La percepción de lo político en Costa Rica*. Heredia, Editorial Fundación UNA. 1998.

Este libro compilado por Jiménez, Oyamburu y González y bellamente editado por la EFUNA, es una útil contribución al análisis de la cultura política e intelectual que prevalece en la sociedad costarricense de fines del siglo XX. Dado que se trata de una obra colectiva, producto de un ciclo de conferencias efectuado en 1997 en el Centro Cultural de España, conviene empezar por clasificar brevemente a sus autores. En efecto, el texto en mención está compuesto por 22 contribuciones, de las cuales solo seis (es decir, ni siquiera un 30 por ciento del total) fueron escritas por mujeres, lo cual explica en parte que la problemática de género sea marginal en dicha obra. En términos profesionales, solo hay dos artículos de políticos (el de Constantino Urcuyo y el de Antonio Álvarez Desanti). El resto fueron escritos por científicos sociales (principalmente sociólogos y comunicadores), filósofos y estudiosos de la literatura. Entre los colaboradores solo hay un historiador (Víctor Hugo Acuña) y, curiosamente, parece no haber ningún politólogo.

Esta composición de género y profesional de los autores de la obra, aparte de reflejar los patrones de selección que operaron en la organización del ciclo de conferencias en 1997, permite entender mejor las

características generales del libro en mención. La primera observación es casi obvia, y se refiere a la calidad desigual de los trabajos en cuanto a su capacidad analítica. En este campo, los textos de Jorge Jiménez, Ciska Raventós, Carolina Carazo, Víctor Hugo Acuña y Manuel Rojas están muy por encima del resto de las contribuciones, en algunas de las cuales el sentido crítico está claramente superado por los juicios morales o emocionales.

La segunda observación es que en la mayoría de los textos es notoria la influencia de dos contextos diferenciados, aunque complementarios y de corto plazo: por un lado, la administración Figueres Olsen, en la que llevaron a cabo medidas tan traumáticas como el cierre del Banco Anglo Costarricense y la "reforma" de las pensiones de los educadores; y por otro, la campaña electoral de 1997, con sus escándalos de corrupción y sus expectativas de un alza sin precedente en el abstencionismo de los ciudadanos. La incidencia de tales contextos, así como la casi total ausencia de historiadores, explica que una de las carencias principales del libro sea una perspectiva de largo plazo, un tema sobre el que volveremos más adelante.

Por último, una tercera característica general es que, a lo largo del libro, las fuentes básicas para analizar la percepción de lo político, son las encuestas de opinión. Si bien la referencia a ellas es solo tácita en algunos textos, y en otros se señalan incluso sus limitaciones, lo cierto es que las mismas proporcionaron la materia prima para reflexionar sobre el desencanto de los ciudadanos con la política y el papel jugado por los medios en este proceso. El efecto principal de esta unilateralidad de las fuentes

* Exposición efectuada en el Centro Cultural de España, el 6 de noviembre de 1998, durante la presentación de este libro.

fue limitar las perspectivas desde las cuales se puede "percibir" lo político. Hechas estas observaciones generales, conviene ahora pasar a analizar, con más detalle, las principales ausencias que figuran en el libro que comentamos.

1. LA AUSENCIA DEL LARGO PLAZO

La primera de tales ausencias es la falta de una perspectiva de largo plazo. Al respecto, vamos a considerar dos problemas asociados con dicha carencia: en primer lugar, la ideología del tiempo que prevalece en la sociedad costarricense; y en segundo lugar, la contextualización de los fenómenos de la impunidad y la corrupción. En cuanto a lo primero, y como lo ha señalado el historiador canadiense Steven Palmer, uno de los mitos fundacionales de Costa Rica como sociedad, es que el pasado siempre fue mejor, que el presente siempre es malo, y que el futuro siempre será peor. Si bien el origen de este mito no es claro, sus primeras manifestaciones son visibles en los relatos costumbristas de fines del siglo XIX. Posteriormente, esta visión impregna los escritos de los intelectuales radicales de comienzos del siglo XX, y es muy clara, por ejemplo, en los ensayos de Mario Sancho y en algunos de los planteamientos del Centro Para el Estudio de los Problemas Nacionales. Sin embargo, quien sistematizó ese mito fundacional fue un historiador, Carlos Monge Alfaro, al inventar, a fines de la década de 1930, que la base de la nacionalidad costarricense era una edad de oro perdida, la democracia rural, que había florecido en el siglo XVIII.

Por el momento, nosotros desconocemos si este mito fundacional fue exclusivo, en un inicio, de solo ciertos círculos intelectuales. También ignoramos a partir de cuándo este mito empezó a ser difundido hacia otros sectores sociales, y en qué medida estos sectores lo aceptaron, lo modificaron o lo rechazaron. Igualmente, desconocemos cómo este mito pudo variar en distintas coyunturas históricas. Lo que sí parece más claro es que la crisis económica de 1980 reactivó esa ideología del tiempo. Después de tres

décadas de crecimiento económico y expansión de las políticas sociales, la sociedad costarricense no solo se empobreció, sino que se vio sometida a una serie de profundos y rápidos cambios económicos, sociales y culturales. En este marco de incertidumbre, todo parecía estar amenazado, incluso las "realidades" más sólidas: las instituciones públicas.

La realidad de esa amenaza empezó a hacerse evidente durante la administración de Calderón Fournier (1990-1994), que inauguró la llamada "terapia de shock". A la puesta en práctica de los programas de movilidad laboral en esos años, siguió, durante la gestión de Figueres Olsen (1994-1998), el cierre del Banco Anglo, el más antiguo del país, y la reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, que generó un conflicto entre los educadores y el Estado sin precedente en las últimas décadas. Así, tanto la crisis económica de 1980, como las políticas económicas y sociales posteriores, deterioraron dos de las creencias básicas de la visión de mundo de los costarricenses (especialmente los de clase media) que se configuró a partir de 1950: la perpetuidad de las instituciones públicas y la estabilidad del empleo estatal.

Fue así, en el contexto de una incertidumbre creciente, que empezaron a proliferar los cargos de corrupción. Si bien no se ha efectuado aún un estudio histórico de dicho fenómeno que demuestre que la corrupción posterior a la crisis económica de 1980 fue mayor que la que hubo anteriormente, hay algunos indicadores que apuntan en esta dirección. Tal crecimiento cuantitativo y cualitativo de la corrupción (tanto en el Estado como en la empresa privada) parece haber sido promovido, inicial y decisivamente, por la presión estadounidense, a partir de 1982, para fortalecer la empresa privada, para disminuir el tamaño del Estado y para ayudar a la contra nicaragüense. Al crear toda una institucionalidad paralela para encauzar los fondos donados o prestados por la AID y otros organismos financieros internacionales, y al irrespetar sistemáticamente el ordenamiento jurídico costarricense con el fin de apoyar la lucha contra los sandinistas, y al hacer todo

esto impunemente, los funcionarios del imperio y sus socios locales (públicos y privados), hicieron una contribución fundamental para consolidar en Costa Rica una cultura de la corrupción y de la impunidad.

En una sociedad en la que la crisis económica de 1980 y las políticas económicas posteriores habían ampliado enormemente los márgenes de incertidumbre, el ejemplo anterior se convirtió en una guía del camino a seguir para las cúpulas políticas, empresariales y profesionales. El hecho de que el recurso a la corrupción con la certeza de la impunidad se convirtiera en un fenómeno cada vez más presente fue favorecido por dos circunstancias. Por un lado, una de tipo ideológico, el ascenso del neoliberalismo, una ideología cuyo énfasis en la eficiencia del mercado supone la denuncia sistemática de la ineficiencia de la institucionalidad existente, con lo cual, aparte de deslegitimarla, fomenta su transgresión. Y por otro lado, una razón de tipo económico: todavía en 1994, y pese a todos los esfuerzos por reducir el papel del Estado, este último, según el economista Thelmo Vargas, controlaba el 60 por ciento del PIB, y la mitad de esa cifra correspondía a instituciones autónomas cuyos presupuestos, aunque sujetos a la revisión de la Contraloría, están fuera del control político de la Asamblea Legislativa.

Por último, la corrupción y la impunidad parecen haber alcanzado nuevos niveles a partir de la década de 1980 a medida que la sociedad costarricense, como producto en parte de la guerra irregular contra los sandinistas, empezó a ser penetrada por el narcotráfico. Si bien no tenemos estadísticas muy detalladas de este fenómeno, los datos fragmentarios son elocuentes. Según funcionarios estadounidenses, en 1990 Costa Rica servía de puente para enviar a Estados Unidos un mínimo de 12 toneladas de cocaína por año; para 1997, ese mínimo se había elevado a 50 toneladas. Aunque estos datos, por sí mismos no nos dicen mucho, son sugerentemente ominosos en cuanto a las fuerzas que parecen estar detrás de ciertas actividades económicas de gran expansión en los últimos años, y de la relación de las cúpulas po-

líticas, empresariales y profesionales costarricenses con esas fuerzas.

Con lo dicho hasta aquí, parece claro que el llamado "desencanto de la política" es parte de un desencanto mayor o, para decirlo más exactamente, de un pesimismo mucho más amplio de ciertos sectores de la población costarricense con respecto al futuro de su sociedad. Y con este tema, paso a lo que me parece es la segunda gran ausencia del libro que comento: ¿quiénes son los pesimistas y cuál es la base de su pesimismo?

2. DESENCANTADOS Y DESENCANTO

A juzgar por las encuestas de opinión, el pesimismo de la población costarricense es generalizado y se manifiesta, de manera particular, en un desencanto con respecto a los políticos. Sin embargo, esto podría ser, simplemente, un resultado de la falta de una perspectiva comparativa. Veamos unos ejemplos tomados de un valioso estudio de Laura Guzmán sobre la maquila en Centroamérica en la década de 1990. Una trabajadora costarricense que labora en una maquiladora cuenta su relación con el médico de la empresa:

"nos llevan un registro de cuando nos toca la regla para pedirnos la muestra de orina y controlar si estamos embarazadas. A veces nos piden que enseñemos la toalla sanitaria. Una se siente tan humillada cuando el doctor hace eso. Nos incapacitan cuando el médico decide, o sea nunca, y usted no tiene cómo pelear su derecho porque no le dan permiso para ir al Seguro. ¿Los inspectores de trabajo? Muy bien gracias. Solo porque necesitamos el trabajo se aguanta todo eso".

Otra trabajadora señala lo siguiente:

"A varias compañeras las despidieron cuando supieron que estaban embarazadas. No les pagaron prestaciones porque les dijeron que ellas sabían

muy bien que tenían que irse si se embarazaban. Y que no fueran a denunciar al Ministerio de Trabajo, pues las ponían en la lista negra para que no les dieran trabajo en ningún lado. Una de ellas denunció y tiene casi dos años de estar sin trabajo”.

Imaginemos que a estas trabajadoras se les preguntara si están más desencantadas con la política costarricense en su sentido electoral que con sus condiciones cotidianas de trabajo. Lamentablemente, sin embargo, quién sabe cuándo tengamos una respuesta de este tipo, porque las empresas encuestadoras no hacen este tipo de preguntas, y buena parte de la investigación social que se realiza en el país, tampoco. Con esto deseamos destacar dos aspectos. Por un lado, las empresas encuestadoras (y los que pagan esas encuestas) parecen muy interesados en concentrar el debate público en ciertas áreas y no en otras. Y una de esas áreas visibles es la que tiene que ver con la política y los políticos.

Por otro lado, y de alguna manera, la mayor parte de los científicos sociales le han hecho el juego a lo anterior, al no preocuparse por estudiar la cultura y la vida cotidiana de los sectores populares en la actualidad, en particular sus formas de resistencia a la explotación, sus formas de organización, sus relaciones con el Estado, los partidos políticos y los medios de comunicación, y su percepción de la política. Esta despreocupación no ha sido casual, y ha estado relacionada con la desradicalización de las vanguardias intelectuales que se forjaron al calor de la lucha contra ALCOA en 1970, y la obsesión actual de los intelectuales costarricenses por insertarse exitosamente en las nuevas condiciones políticas y económicas de fines del siglo XX.

A diferencia de Carlos Sandoval García, quien realizó un estudio directo y sin concesiones de los sueños y sudores cotidianos de los trabajadores y las trabajadoras de la maquila y la construcción, la mayor parte de los científicos sociales han evitado este tipo de temas. Al renunciar, en gran medida, a explorar esta dimensión de la realidad social y

política, han dejado entonces que sean otros los que la definan, de una manera completamente parcial y limitada. De esto es un buen ejemplo el libro que comentamos hoy, en el cual la escasa preocupación por los sectores populares es un indicador de los prejuicios de clase que padecen los intelectuales costarricenses actuales.

Lo poco que conocemos sobre los sectores populares nos sugiere que esos amplios grupos de la población tienen abundantes motivos para estar desencantados, ya que en los últimos veinte años el deterioro de los servicios públicos, especialmente en salud y educación, se ha visto acompañado por un deterioro de las condiciones laborales, de lo cual las maquiladoras son, por decirlo en términos neoliberales, un ejemplo eficiente. Aunque desconocemos cuán desencantados pueden estar estos sectores de la política electoral (si es que lo están), parece razonable sospechar que su desencanto sea mayor con la economía política.

Esto nos obliga a reconsiderar, con mayor precisión, quiénes son los principales desencantados con la política y los políticos. El libro que comentamos sugiere una respuesta: los sectores medios, vinculados al empleo público, y especialmente los intelectuales, cuya proyección en los medios de comunicación y en las empresas encuestadoras ha contribuido a privilegiar la política y los políticos (y no la vida cotidiana de los sectores populares, por ejemplo) como objetos estratégicos de investigación. En otras palabras: enfrentados con cambios económicos e institucionales que ya los han perjudicado, y que amenazan perjudicarlos aún más, los sectores medios vinculados al empleo público, y en especial los intelectuales, han convertido el cuestionamiento sistemático de la política y los políticos en una vía para revalorizar su protagonismo y su necesidad social en la esfera pública.

3. LA DINÁMICA POLÍTICA

Hay una última ausencia que vale la pena examinar, y es la falta de reflexión en

torno a la dinámica política y, en particular, a las relaciones entre el electorado, los políticos y los partidos. Dada la inexistencia de una carrera parlamentaria y el hecho de que los presidentes no puedan ser reelectos, los votantes costarricenses tienen un control muy limitado sobre los políticos, y estos últimos actúan fuertemente condicionados por una dinámica de corto plazo. Veamos algunos ejemplos.

El hecho de que los aspirantes a diputado no sean electos de manera directa significa que sus carreras políticas, más que del apoyo de los votantes, depende de sus lealtades, más o menos ciegas, a las dirigencias de los partidos, y en particular, a los candidatos presidenciales de turno. Ahora bien, una vez que son diputados, estas lealtades son reforzadas mediante la llamada línea de partido, y una de las principales razones por las cuales ocurre esto es que los diputados no pueden ser reelectos inmediatamente. En consecuencia, apenas en sus partidos se activan las luchas para la próxima elección, los diputados empiezan a vincularse decisivamente con los precandidatos o candidatos que se perfilan como ganadores, ya que de esto va a depender que puedan, eventualmente, continuar en la función pública como ministros, presidentes ejecutivos o embajadores. Así pues, la dinámica política en cuanto a la elección de diputados está basada primordialmente en la lealtad al partido o al candidato y no en la responsabilidad ante los votantes.

En el caso de los presidentes, la situación es similar. Al no poder ser reelectos, cada gestión presidencial se convierte en una oportunidad única, que debe ser aprovechada a fondo porque ya no se volverá a disfrutar en el futuro y, por tanto, fuera del control de los votantes. En efecto, sin la perspectiva de una segunda vez, para los presidentes tiene poco sentido construir plataformas y equipos político-electorales más estables, por lo que este "capital político" tiende a agotarse en una sola gestión. La prohibición que pesa sobre la reelección presidencial tiene otra cara, y es la de fomentar, más allá del arribismo político, una fragmentación excesiva

de las dirigencias políticas, con los consiguientes efectos que esto supone para la operabilidad de la política como tal.

El producto de todo lo anterior es que la política-electoral, aparte de estar muy condicionada por factores de corto plazo, limita que el voto se convierta en un medio eficaz mediante el cual el electorado pueda ejercer algún control sobre los políticos. En este marco, parece razonable que el electorado (y especialmente sus sectores intelectuales) se sienta no solo impotente y frustrado ante una política electoral que no solo no le permite elegir a buena parte de los políticos en una elección directa, sino que tampoco le permite premiarlos o castigarlos según su desempeño público.

Ante esta situación, la salida obvia parece ser presionar por una reforma electoral que disminuya el control de los partidos sobre la política electoral y aumente el control del electorado sobre la misma. De alguna manera, ya hay avances por esta vía. Poco más de un siglo después de que se iniciaron las presiones para que los jefes políticos fueran electos de manera directa, esa reforma al fin se ha logrado (aunque ahora no se llaman jefes políticos ni ejecutivos municipales, sino alcaldes). Ojalá que no tengamos que esperar otros cien años para que otro conjunto de importantes reformas electorales sea aprobado.

Para terminar, es oportuno destacar que quizá un mejor título para el libro que hoy comentamos sería *La percepción de lo político en Costa Rica según los intelectuales*. Decimos esto porque más allá de algunos valiosos aportes concretos al estudio de la política tica de fines del siglo XX, este libro se convertirá en una fuente básica sobre los temores, las dudas, las frustraciones, los prejuicios y las esperanzas que, en relación con lo político, circulan entre un amplio sector de los intelectuales costarricenses de la última década del siglo XX.

Iván Molina Jiménez
Universidad de Costa Rica